

# Crónica del mes

Mayo

El predominio de la agenda política sobre otros aspectos de interés nacional marcó el correr del mes de mayo. A dos meses de los pasados comicios legislativos y municipales, el país asistió a un nuevo escenario preelectoral. Con elecciones presidenciales en el horizonte próximo, los partidos políticos volvieron a sus andanzas y empezaron la carrera hacia Casa Presidencial. Distintas personalidades de la vida nacional pasaron por la criba de las cúpulas partidarias que terminaron por definir las precandidaturas que se disputarían la fórmula presidencial a presentar en las futuras justas electorales. Los debates y las confrontaciones internas no se hicieron esperar. El FMLN, primera fuerza política del país desde marzo anterior, y ARENA, aferrándose al Ejecutivo, fueron los dos institutos políticos cuyos procesos de elección interna mantuvieron en vilo a la opinión pública salvadoreña. Es de justicia señalar que, a la par de este escenario perfectamente ilustrado por los medios informativos, problemas gruesos como la crisis de la salud fueron absorbidos por el juego de la política. No es de extrañar, pues, que las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo postergaran un mes más la solución de la crisis.

El 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo, tuvieron lugar las ceremonias de traspaso de mando en los escenarios legislativo y municipal, para dar inicio al período 2003-2006. Los diputados de la nueva legislatura tomaron posesión de sus cargos en medio de un inusitado entendimiento parlamentario entre las fracciones del PCN y el FMLN, que se repartieron la mayoría de sillas disponibles en la Junta Directiva, cediendo la presidencia del primer Órgano del Estado al pecenista Ciro Cruz Zepeda, por tercer período consecutivo. Las fracciones de ARENA, PDC y CDU resintieron el inédito acercamiento, sin la capacidad suficiente de

revertirlo. Tanto pecenistas como efemelenistas defendían la alianza legislativa que sellaron en el reparto de la junta, mismo que daría rienda suelta a otras iniciativas comunes en temas de interés nacional. Ese mismo día, el alcalde electo de San Salvador, el efemelenista Carlos Rivas Zamora y su concejo municipal asumían sus nuevos cargos al frente de la municipalidad capitalina, en un acto que pareció más un mitin del partido FMLN. El alcalde saliente, Héctor Silva, entregó la vara edilicia a quien fuera su síndico municipal, reñido con el partido que le llevó a ese cargo público. Rivas Zamora se comprometió a dar continuidad a los proyectos que aún quedaban pendientes de la comuna capitalina. Los restantes alcaldes del país tuvieron similares actos de toma de posesión.

Indudablemente, lo que más destacó del Ejecutivo fue su tormentosa relación con la Asamblea Legislativa. El recurso del veto presidencial mantuvo en constante fricción a ambos poderes del estado. Otras cuestiones propias del Poder Ejecutivo no robaron los mismos espacios informativos. El único hecho al respecto que se salió de la "normalidad" fue el regreso de la ex ministra de Educación, Evelyn Jacir de Lovo, juramentada el día 9 de mayo por el presidente Flores como comisionada presidencial para coordinar el trabajo en las áreas sociales en el año que resta de su gobierno. En una entrevista publicada por un rotativo nacional, Jacir de Lovo aseguró que desde 1999 se había dedicado a las áreas sociales en la gestión de Flores: "pretendemos volver a los orígenes. Los terremotos cambiaron muchas de nuestras prioridades y vamos a reenfocarnos", aseguró la recontratada funcionaria. Un día antes, Flores anunciaba también que el subcomisionado de la Policía Nacional Civil, Mauricio Meneses, sería nombrado como nuevo director del cuerpo policial, en sustitución de Mau-

ricio Sandoval, que abrazaba la posibilidad de convertirse en candidato presidencial por el partido ARENA.

El día 2 de mayo, el presidente Francisco Flores vetó el decreto legislativo impulsado por las fracciones opositoras en el que se ordenaba el reinstalo de los médicos y trabajadores sindicalistas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), para poner fin a la huelga que desde septiembre del año pasado mantiene en vilo al sector salud. Flores se escudó en supuestos vicios de inconstitucionalidad del decreto porque invadiría los poderes Ejecutivo y Judicial, y violaría los principios de seguridad jurídica y debido proceso. De acuerdo al mandatario, los 350 médicos suspendidos desde octubre de 2002 perdieron automáticamente sus garantías en el Seguro Social. Al mismo tiempo, vetó otro decreto en el que se estipulaban medidas paliativas para el sector cafetalero, como el freno a los embargos y condonaciones de pago de deuda. Finalmente, el presidente solo se limitó a hacer observaciones "leves" a un último decreto que dictaminaba el perdón de las multas de tránsito a los conductores que, desde 1996, habían infringido la Ley de Transporte Terrestre.

En el seno legislativo, las bancadas del PCN y el FMLN adelantaron que unirían sus votos para superar el veto, mientras que el CDU y el PDC manifestaban su cautela. El gremio médico reaccionó instando a las fracciones legislativas de oposición para que se superara el veto presidencial. Paralelamente, los trabajadores sindicalistas anunciaron que ejercerían medidas de presión al gobierno como toma de calles, hospitales y manifestaciones. El día 6, un grupo de sindicalistas se tomó por la fuerza las instalaciones del hospital 1º de Mayo, ante la pasividad de los elementos policiales que custodiaban el recinto. Un día después, reseñaba un matutino nacional, 94 médicos del sindicato SIMETRISSE renunciaron a esa organización por considerar que no respondía a sus intereses. Tales médicos manifestaron que recibían amenazas y rechazo de los miembros del sindicato.

El día 7, la nueva directiva de la Asamblea Legislativa dirigida por el FMLN y el PCN dictaminó el "reparto" de las presidencias de las 18 comisiones de trabajo en la actual gestión parlamentaria. Del acuerdo entre efemelenistas y pecenistas resultó que ARENA perdería tres presidencias, con respecto a la legislatura anterior, presidiendo cinco en esta oportunidad (Economía, Legislación,

Defensa, Juventud y Relaciones Exteriores); el FMLN aumentaría de cuatro a seis (Hacienda, Obras Públicas, Justicia y Derechos Humanos, Trabajo, Reformas Electorales y Salud Pública); y el PCN conservaría cinco (Seguridad Pública, Asuntos Municipales, Modernización y Educación y Política, que reúne a los jefes de fracción). El CDU y el PDC presidirían una comisión cada uno (Financiera y de Familia, Mujer y Niñez, respectivamente).

El 12 de mayo, en el contexto de la primera sesión solemne de la legislatura 2003-2006, todas las fracciones opositoras coincidieron en lanzar críticas al presidente Flores, quien se encontraba en el seno legislativo en calidad de invitado. Las bancadas del PCN y el FMLN fueron las más críticas con la gestión de Flores, acusándolo de abandonar a sectores sociales importantes, golpear a la población con sus políticas impopulares y deshacerse de los bienes del Estado. Cruz Zepeda se encargó de ilustrar la relación parlamentaria entre pecenistas y efemelenistas: "El FMLN y el PCN conservamos nuestra propia identidad ideológica y política. En algunos casos coincidiremos y en otros no coincidiremos", espetó. Al término del encuentro legislativo, la embajadora estadounidense, Rose Likins, reaccionó ante la publicación de un comunicado firmado por el coordinador general del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, en el que ese partido señala al jefe de la Oficina de Intereses Estadounidenses en Cuba, James Cason, de trabajar "abiertamente para los intereses de la mafia cubana en Miami". Likins desestimó las declaraciones vertidas en el campo pagado y opinó que las intenciones del comunicado eran "defender las acciones de Castro, que ha fusilado a tres personas y ha apresado a periodistas por hablar con mi colega James Cason". La diplomática también criticó las intenciones del FMLN de revisar las privatizaciones implementadas en el país. El partido de izquierda trató en los días siguientes de limar las asperezas con la diplomacia estadounidense.

El 14, el PDC decidió esconder sus votos para poder superar el veto presidencial que negaba el reinstalo de los médicos huelguistas del Seguro Social. Los democristianos pusieron como condición que el gobierno dialogara con los sindicalistas para permitir el reinstalo de estos últimos, sobre la base de un acuerdo consensuado. El día 15, durante la primera sesión ordinaria de la nueva legislatura, los partidos de oposición no lograron unir los votos suficientes para superar el veto de Flores. Mientras tanto, el mandatario aseguró ese

mismo día que estaba dispuesto a retornar a la mesa de negociación con los médicos para solucionar la huelga. Paralelamente, un grupo de sindicalistas del ISSS se tomó las instalaciones del Hospital Psiquiátrico, sumando con ello tres centros de salud en su poder (1° de Mayo y Especialidades).

El 19, algunos legisladores del FMLN se reunieron con el viceministro de Salud, Herbert Betancourt, para aclarar los términos de un empréstito internacional de 142.6 millones de dólares, que sería destinado para la reconstrucción y modernización de la red hospitalaria del país, mismo al que se había opuesto durante meses el partido de izquierda, por considerar que contemplaba la privatización del sector salud. El FMLN adelantó que sumaría sus votos para que la Asamblea aprobara el préstamo. "En ningún momento hemos tenido la intención de privatizar", aseguró Betancourt.

El día 20, sorprendentemente, el democristiano Rodolfo Parker y los miembros del CDU, Héctor Silva y Rubén Zamora, anunciaron que mediarían en una nueva negociación entre el gobierno y los sindicalistas del ISSS que se mantenían en huelga. Por el lado del gobierno negociarían Salvador Samayoa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública; Herbert Betancourt, viceministro de Salud; y Mauricio Ramos Fallas, director general del ISSS. Por su parte, la comisión tripartita había designado a Guillermo Mata, presidente del Colegio Médico, Isaías Cordero, de SIMETRISS, y al galeno Melvin Guardado. "El presidente de la República Francisco Flores y los médicos del ISSS y del Colegio Médico nos solicitaron que iniciemos un proceso de negociación del conflicto, en el que desempeñaremos el papel de mediadores", aseguró Zamora, secretario general del CDU. Hasta ese día, se veían visos de entendimiento entre las partes para solucionar el conflicto en el sector.

Sin embargo, el día 22, los médicos afirmaron que se retirarían de la mesa de negociación, en vistas de que la parte gubernamental solo había decidido reinstalar a los médicos huelguistas y no así a los trabajadores. "Mientras la cúpula que está representando a los médicos tenga la esperanza de que por la vía de la Asamblea le van a torcer el brazo al presidente, entonces él nunca va a querer negociar. Ese es el problema", aseguró el negociador gubernamental Salvador Samayoa, de acuerdo a una fuente periodística. El 28, iniciaron nuevamente las conversaciones entre las partes, sin que al término del mes se dejaran ver resultados concretos.

A dos meses de los comicios legislativos y municipales, los principales institutos políticos comenzaron la carrera en vistas de las futuras justas presidenciales de 2004. Los procesos electorarios internos corrieron a la par de las discusiones en torno a posibles alianzas partidarias. A principios del mes, el ex presidente de ARENA, Roberto Murray Meza, había planteado la posibilidad de una alianza electoral de su partido que incluyera al PCN, PDC y el CDU de tendencia centroizquierdista. Estos dos últimos institutos también evaluaban la viabilidad de presentar una fórmula conjunta para los futuros comicios. El FMLN aparecía envalentonado al salir airoso de las justas electorales de marzo pasado y no hablaba de alianza alguna.

Paralelamente, las fuerzas políticas mayoritarias, FMLN y ARENA, cabildeaban las precandidaturas que consideraban serían las cartas ganadoras para llegar a Casa Presidencial el año próximo. No faltaron en esa carrera los enfrentamientos públicos, los debates generacionales, la reprimendas de los dirigentes y las encuestas de opinión que favorecían a una u otra personalidad en contienda. En las esferas areneras, el regreso de los ex presidentes Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani fue la nota más destacable durante el mes, pese a la emergencia de pre candidatos "novatos", como el caso del ex director policial Mauricio Sandoval quien se encontraba en plena campaña proselitista a su favor.

En el redil efemelenista, la búsqueda de una fórmula de "consenso" terminó por fracasar al imponerse las directrices de la cúpula partidaria que ratificó el poderío del líder histórico Schafik Haldal por sobre las encuestas que clamaban un candidato más potable para el electorado. Los nombres del periodista Mauricio Funes, el economista Arturo Zablah y la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Victoria de Avilés, que figuraban dentro de la lista efemelenista para definir, junto con Schafik Handal y Óscar Ortíz, la fórmula presidencial por el FMLN, fueron apagándose mientras las figuras históricas se alzaban en la estructura del partido.

A mediados del mes, el nombre de Armando Calderón Sol era barajado como posibilidad de disputar la candidatura presidencial por ARENA. El 16, horas después de que el COENA diera a conocer el mecanismo de selección del candidato presidencial arenero, la estructura del partido en San Salvador manifestaba su apoyo a la precandi-

data de Calderón Sol. Posteriormente, Antonio Salaverría, actual presidente del partido, reprendió la intencionalidad arenera capitalina, dejando claro que por el momento no se podía expresar públicamente apoyo a ninguno de los precandidatos. Un día después, la cúpula del FMLN decidió que la Comisión Política tomara la decisión sobre las precandidaturas. De acuerdo al máximo organismo de dirección de ese partido, la fórmula sería mixta, es decir, compuesta por un candidato que perteneciera al partido y una persona en calidad de "foráneo". Las bases únicamente ratificarían la decisión de la cúpula efemelenista.

Desde el 20 de mayo, las encuestas de opinión empezaron a revelar las tendencias sobre las posibilidades electorales de los institutos políticos en contienda, en la carrera por las elecciones presidenciales del 2004. La primera de ellas, de la Universidad Tecnológica, reveló que el FMLN aventaja a ARENA en 10 puntos en las intenciones de voto. El estudio determinó que, más que el partido, los salvadoreños se inclinarían por la persona postulada detrás de la bandera política. De los resultados se obtuvo que el periodista Mauricio Funes, pese a no ser militante ni precandidato del FMLN, acaparaba el 62.22 por ciento de opiniones favorables para quedarse con la presidencia de la República, seguido por el diputado del CDU Héctor Silva (61.7 por ciento), en representación del centro político y, en último término, el ex director de la Policía, Mauricio Sandoval (29.98 por ciento), por ARENA. "Para nosotros, las encuestas de opinión son parte de los elementos que vamos a analizar para seleccionar al candidato a la presidencia", aseguraba el coordinador general del FMLN, Salvador Sánchez Cerén. El 24, trascendió que Funes gozaba de un amplio apoyo en las bases y en la estructura del FMLN, por encima del dirigente histórico Handal. Un segundo sondeo de opinión revelaba una ventaja de ARENA sobre el FMLN en las intenciones de voto para las elecciones presidenciales del 2004. Mauricio Funes y Antonio Saca aparecen, de nueva cuenta, como las figuras más populares para disputarse la presidencia.

El 25, el presidente del Colegio Médico y reconocido líder de la causa sindical en el ISSS, Guillermo Mata Bennet, aseguró que sostenía conversaciones con dirigentes del FMLN para una posible precandidatura. El 26, dirigentes efemelenistas revelaron que la cúpula del partido había elegido a Schafik Handal, la figura más erosionada de

entre los posibles candidatos, como la carta que ofrecerían para disputarse la silla presidencial el año próximo. Ese mismo día, Armando Calderón Sol, hacía oficial su precandidatura. "Con mi experiencia y con una visión amplia de futuro, he valorado la situación que vive el país, y como ciudadano y líder político no me puedo quedar de espectador viendo que El Salvador enfrenta una constante amenaza de los antisistema", expresó el ex mandatario. El otro precandidato arenero hasta entonces, Mauricio Sandoval, no se guardó sus reacciones críticas al lanzamiento oficial de Calderón Sol: "la sabiduría del pueblo radica en que los mandatarios tienen que estar solo cinco años en el poder, lo que significa que deben ir renovando a sus gobernantes", declaró. El día 27, Sandoval presentó ante un grupo de personas por él invitadas un vídeo en el que resume su vida desde niño, en una clara campaña proselitista. Sandoval fustigó al COENA el apoyo que había manifestado a su contrincante Calderón Sol.

El 28, en las cercanías de que el presidente Flores cumpliera un nuevo año de gestión, el matutino *La Prensa Gráfica* publicó los resultados de la primera encuesta sobre el 4º año de gobierno de Flores. Allí se decía que los salvadoreños (un 72 por ciento de los consultados) resentían el manejo que el presidente le había dado a la huelga de la salud. Los encuestados calificaron la gestión de Flores con una nota promedio de 4.2. A finales de mes, solo los nombres del médico Mata Bennet y Arturo Zablah aparecían en la lista de la Comisión Política efemelenista para acompañar a Handal en la mal llamada "fórmula de consenso". Se daba por descontado la marginación de Mauricio Funes. Ese mismo día 28, Handal fue ratificado por la cúpula partidaria como precandidato. "Al final, esa es la decisión que ha tomado la dirección nacional del partido, aunque yo no la comparto, aunque la respeto", expresó el contrincante de Handal, Óscar Ortíz, actual alcalde de Nueva San Salvador. Los cuestionamientos sobre la "democracia" del FMLN para elegir a Handal no tardaron en llegar, además de las críticas internas, desde diversos sectores externos al partido.

Finalmente, para terminar el capítulo preeleccionario, se dieron dos hechos ya recurrentes en el sistema político salvadoreño: el 29 de mayo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reincidió en sus promesas infundadas: prometió que en las elecciones de 2004 se podría votar mediante el Documen-

to Único de Identidad (DUI) y se implementaría el voto residencial. No obstante, se lee en una nota periodística, las condiciones para que el TSE cumpla son las siguientes: terminar el programa informático con el que se sustentará el nuevo padrón electoral, levantamiento cartográfico para asignar los lugares de votación y que la Asamblea Legislativa otorgue el presupuesto correspondiente a más tardar al término del mes. Ese mismo día, el diputado pectenista Walter Guzmán, anunció que dejaba de vestir la camiseta del partido que le llevó a la Asamblea para cambiarse a la fracción legislativa de ARENA, disminuyendo la cuota parlamentaria del PCN a 14 legisladores y aumentando a 28 la bancada arenera. "Decidí cambiarme por la nefasta alianza que la cúpula del PCN ha hecho con el partido comunista del FMLN", aseguró el diputado Guzmán. El mismo día 29, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) presentaba los resultados de su última encuesta en la que evaluaba el cuarto año de Flores en el poder.

Saliendo de la dinámica del sistema político, otros temas de interés nacional acapararon la atención de la opinión pública. Los más trillados: el escándalo nacional por la venta de información privada de miles de salvadoreños fuera de las fronteras, el supuesto desfalco en uno de los proyectos hídricos más importantes en los últimos años en el país y la repulsa pública a la conducta de un candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. A ello le precedió una denuncia periodística que señalaba la incoherencia de las políticas de comunicación de dos alcaldías claves del Gran San Salvador: durante la primera semana de gestión de los concejos municipales del FMLN en San Salvador y Soyapango, un rotativo de circulación nacional denunciaba que en esas municipalidades se había centralizado la información de carácter público, al punto de que no se establecían claramente los canales institucionales de comunicación. La denuncia periodística parecía preludear una nueva embestida mediática en contra de la administración edilicia del FMLN, en San Salvador. Con todo, lo cierto fue que los nuevos alcaldes no gozaron de una cobertura periodística "notable" durante su primer mes de gestión pública.

El día 12, el matutino *La Prensa Gráfica* publicó los resultados de una investigación en la que se concluía que "el proyecto de agua potable más importante del Gobierno en los últimos ocho años está envuelto en una serie de anomalías técnicas,

legales y administrativas que ha provocado retrasos y pérdidas a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)". El ex presidente de la institución autónoma, Carlos Perla, había rubricado un contrato con el ya controversial empresario español Joaquín Alviz, para que su compañía ejecutara la segunda fase del proyecto Río Lempa, que permitiría aumentar el suministro de agua potable para la ciudad capital. Para desarrollar el proyecto se consiguió un financiamiento de 30 millones de dólares. Trascendió que en mayo de 2002, Perla había entregado el proyecto como finalizado, en presencia del mismo presidente de la República, aunque no se había ejecutado en su totalidad. Al retirarse misteriosamente de ANDA, Perla no dejó documento alguno que amparara el contrato con la empresa española, violentando, a juicio del rotativo, la Ley de Licitaciones.

El actual presidente de ANDA, Manuel Arrieta, dio pauta a que la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas iniciaran las investigaciones pertinentes, para determinar la cuantía de las irregularidades del contrato, del cual se habían autorizado cinco costosas prórrogas hasta la fecha. El día 13, el mismo matutino publicó una segunda entrega de la investigación, en la que incluía una entrevista con Perla, quien expresa con toda la ingenuidad del caso: "para mí, el hecho de que se inauguró con el presidente de la república es constancia oficial de que la obra fue inaugurada".

Curiosamente, contrario a las promesas de Carlos Perla para el 2003, el vital líquido seguía haciendo falta en las colonias de los municipios de Ayutuxtepeque, Soyapango, Santa Tecla y Mejicanos, para citar algunos ejemplos. Dos días después, el mismo periódico reseñaba que "la firma de dos certificados por parte del ex presidente de ANDA y de un ex gerente de dicha institución (Mario Orellana), dando por recibida la obra sin terminar, impiden que la autónoma salvadoreña pueda reclamar 6 millones de dólares a la UTE [consorcio de empresas españolas socias de Alviz] por incumplimiento en el plazo para finalizar el proyecto". Al cierre del mes, ni Perla ni nadie había dado explicaciones claras sobre las irregularidades descubiertas en el proyecto.

Respecto del escándalo sobre la venta de información de unos 4 millones de salvadoreños, el día 13 de mayo, la Corte Suprema de Justicia recibió un recurso de amparo presentado por una organización ciudadana, que se mostró ofendida con las

acciones que realizaba la empresa guatemalteca Infor.net fuera del país. En su página de Internet ([www.infor.net](http://www.infor.net)), se ofrecía a las empresas "información fidedigna, completa y actualizada, de cómodo acceso y fácil interpretación, a bajo costo y alto valor que aumente oportunidades y reduzca el riesgo en sus operaciones". A cambio de unos dólares, Infor.net ofrecía la posibilidad de tener acceso a fichas con datos de cualquier persona. La propaganda del negocio mostraba una ficha de ejemplo, en la que se consignaban las generales del individuo, así como su ocupación actual y los números de sus documentos de identificación personal. Todo esto con un simple *click* en la computadora y una transacción económica agilizada en virtud de la tecnología informática. La información detalla también si el sujeto tiene antecedentes judiciales o si su nombre aparece en los periódicos, así como un listado de parientes cercanos.

Los representantes de la empresa habían reconocido que los datos privados de los salvadoreños eran tomados en el país y procesados en Guatemala, para ser vendidos al mejor postor en diferentes países. Mientras el Ministerio Público guatemalteco había procedido, el día 19, a cerrar las operaciones de la empresa en el vecino país, la Fiscalía salvadoreña se encontraba en proceso de investigación, del cual adelantaban que podría no existir delito alguno en virtud de que la legislación salvadoreña no contempla ese tipo de casos. Un matutino local había mostrado como ejemplo fichas con información personal del presidente Francisco Flores y del diputado efemelenista Schafik Handal. Infor.net también operaba en los demás países de la región.

La misma empresa había sido objeto de denuncias en Nicaragua, país donde estuvo vinculada a la venta de información procedente nada menos que del padrón electoral, la banca privada y la Superintendencia de Bancos. En el escándalo también resultaron involucradas dos empresas de origen nicaragüense (*Associated Press*, 25 de marzo de 2003). Un artículo del matutino *La Prensa* revela algo similar a lo que se dio a conocer en El Salvador: Infor.net maneja datos de personajes de la vida pública nicaragüense, como los ex presidentes Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, así como de los funcionarios que están al frente del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, aunque no del presidente Enrique Bolaños.

Las autoridades salvadoreñas se alarmaron al conocer que uno de los clientes de Infor.net era el gobierno de Estados Unidos, cosa que fue reconocida por la propia embajadora de ese país en San Salvador, según el matutino *El Diario de Hoy*, en su edición del 20 de mayo. El hecho, que pone en peligro la soberanía nacional, tiene largas implicaciones. Un informe periodístico publicado por *Radio Habana Cuba* afirmaba que Infor.net no solo había sacado datos del padrón electoral de Nicaragua, como ya se dijo, sino también de Guatemala, Honduras y El Salvador, para enviárselos a una empresa estadounidense mayor, *Choice Point*, con sede en la ciudad de Atlanta. "Esta institución es ni más ni menos que la forma privatizada que tienen los organismos de seguridad de Estados Unidos para hurgar en la vida íntima de los ciudadanos, para ver qué cosa hace, cuándo y cómo lo hace, y qué implicaciones pueden tener sus actos para los intereses del gobierno", explica la nota.

La empresa *Choice Point* admitió sin mayores reparos que su información ha servido tanto para empresas destacadas como para el mismo gobierno estadounidense. Sus clientes dentro del gobierno son la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés); distintas oficinas gubernamentales a escala local, estatal o federal; los servicios antinarcóticos (conocidos bajo las siglas DEA) y los Servicios de Inmigración y Naturalización (INS). Como dato curioso, la página de Internet (<http://www.choicepoint.net>) de la empresa asegura que posee acciones en la bolsa de valores neoyorquina y que su lema reza de la siguiente forma: "Con decisiones más inteligentes, un mundo más seguro". Según la radio cubana, *Choice Point* hace el trabajo que los servicios de seguridad estatales norteamericanos no pueden hacer debido a las prohibiciones legales, que tienen vedado "a las instituciones federales y estatales escudriñar en la zona íntima de las personas, pero no dice nada respecto a que lo hagan empresas particulares por su cuenta y riesgo".

El día 28 de mayo, un nuevo escándalo se desató en la opinión pública salvadoreña: la Policía Nacional Civil, atendiendo una llamada de alerta, decomisó gran cantidad de material pornográfico en la residencia del abogado Salvador Nelson García, hasta entonces candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Policía justificó que no se capturó al abogado por no existir flagrancia,

pese a la existencia de material en el lugar. Las condenas morales empezaron a hacerse realidad: el director del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), Ismael Rodríguez, y la jueza primera de ejecución de medidas de San Salvador, Aída Santos de Escobar, fueron los primeros en lanzar la piedra. García reconoció ante las cámaras poseer fotos y vídeos de mujeres desnudas, de quienes dijo eran sus mujeres; rechazó además ser corruptor de menores.

El 29, un día después de los hechos, la Fiscalía General ordenó la captura del abogado, a quien se acusaba de cuatro delitos relacionados con la corrupción sexual de menores (corrupción de menores e incapaces, corrupción agravada, otras agresiones sexuales y agresión sexual en menor e incapaz). El fiscal general, Belisario Artiga, recriminó a la Policía el hecho de no haber capturado a García en su oportunidad. No obstante, el cuerpo policial justificó su procedimiento: "No lo encontramos haciendo ningún acto de corrupción con las menores", se defendió el nuevo director de la Policía, Ricardo Meneses. Ese mismo día, la presidenta de la Federación de Abogados de El Salvador, Julia Cañas de Figueroa, aseguró que García "ya no tiene calidad moral pública ni privada" para que aspire a algún cargo público. Hasta el 30, había 10 ofendidos en contra de García en distintas instancias públicas, sin que la Policía diera con el paradero del prófugo de la justicia.

En lo que a la dinámica económica concierne, el Ejecutivo dio rienda suelta a su imaginación política para volcarse sobre la microeconomía familiar, frente a los resultados electorales que en marzo pasado le echaron en cara el distanciamiento de sus políticas económicas con respecto a las necesidades de la población. El presidente dijo, semanas antes, haber entendido el mensaje que los salvadoreños le daban en las pasadas elecciones y se comprometió a impulsar medidas orientadas a mejorar la capacidad adquisitiva de la población, entre ellas el aumento al salario mínimo y la disminución de las tarifas eléctricas. En torno a la primera medida ya existía un debate nacional que apuntaba a una posible alza en los salarios para los trabajadores urbanos.

No obstante el rechazo de algunos sectores como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), el presidente Flores daría su aval a un incremento salarial diferenciado. No podían faltar las proyecciones guber-

namentales que aseguraban una recuperación de la actividad económica y auguraban mejores condiciones. Paralelamente a estos temas, el Ejecutivo continuó liderando las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA), que en el mes de mayo reunió a los negociadores en una cuarta ronda de cabildos en la ciudad de Guatemala, país que empezó a dar signos claros de distanciamiento respecto del resto de naciones del área.

El día 7, FUSADES hizo públicas sus críticas a las medidas económicas anunciadas por el presidente Flores y fustigó las decisiones tomadas al interior de la Asamblea Legislativa, en el sentido de avalar el reinstalo de los médicos y trabajadores huelguistas por la vía del decreto. Para la gremial, las condiciones socioeconómicas del país dificultarían la implementación de las medidas anunciadas por el mandatario. Para el economista Roberto Rivera Campos, de la fundación de los empresarios, decretar amnistía a los médicos y trabajadores huelguistas y suspender el pago de las multas de tránsito y los embargos cafetaleros son medidas que atentan en contra de la institucionalidad del país. "La historia de América Latina es rica en ejemplos de países que han sucumbido en estas épocas en que el propósito de ganar votos se privilegia sobre la buena gestión económica", criticó Rivera Campos.

La fundación argumentó, además, que con ese tipo de medidas populistas se comprometía el déficit fiscal y el endeudamiento público. FUSADES solo avaló las reformas en el sector eléctrico anunciadas por Flores, por considerar que tendrían un impacto directo en la capacidad adquisitiva de los consumidores. Como era de esperar, FUSADES también discrepó de un aumento al salario mínimo para los trabajadores urbanos salvadoreños. "Analizando el contexto internacional y la situación de mora de algunas empresas, no encuentra uno esta medida muy apropiada", razonó el jefe de la sección microeconómica, Rafael Lemus. No obstante, las principales gremiales empresariales, ANEP, Cámara de Comercio y AMPES defendieron la posibilidad del aumento del salario, distanciándose de la postura de FUSADES.

El 12, el ministro de Hacienda y la presidenta del Banco Central de Reserva, Juan José Daboub y Luz María de Portillo, respectivamente, coincidieron en destacar la recuperación de la economía salvadoreña, durante el primer trimestre del pre-

sente año. Según las cifras oficiales, las exportaciones habrían crecido un 13.4 por ciento, el crédito bancario un 9.7 por ciento y las remesas familiares un 4 por ciento. En el área fiscal, el ministro de Hacienda aseguró que el déficit fiscal se encontraba cerca del 32 por ciento, por debajo del registrado hace un año; de seguir esa tendencia —aseguró el funcionario—, el déficit cerraría el año en un 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), menor que el 3.3 por ciento registrado el año pasado. Un día después, FUSADES hizo público su Informe de Coyuntura Económica correspondiente al primer trimestre del año en el cual destacaba las coincidencias con los informes oficiales. Para el caso —concluye FUSADES—, las exportaciones totales habrían experimentado un crecimiento de 13 por ciento en el período señalado, con respecto al mismo período del año anterior. La fundación alertó nuevamente sobre el riesgo del déficit fiscal y la deuda pública, advertencia que días después fue desestimada por el propio presidente Francisco Flores.

El día 13, siguiendo los lineamientos de Flores, el viceministro de Vivienda, César Alvarado, confirmó que reducirían las cuotas de las viviendas de interés social en un proyecto que involucra a las empresas constructoras y a la banca privada, junto con instituciones del Estado. A juicio del funcionario, las cuotas bajarían en un 10 por ciento, aunque no precisó la cantidad ni la fecha de inicio del proyecto “porque el estudio no lo hemos concluido”. Lejos de esa medida, no hubo discusión pública que se planteara el tema de la necesaria reforma de la política gubernamental de vivienda, sobre todo luego de que no se tenga noticia del estado de la cuestión (déficit, créditos, programas, disponibilidad, entre otros) luego de los terremotos de 2001. Un día después, fuentes del gobierno central aseguraron que el presidente Flores daba su aval a un aumento del salario mínimo en forma diferenciada: 10 por ciento para el sector comercio y servicios, 7.5 por ciento para la industria y 5 por ciento para la maquila, dejando intacto al sector agrícola. El día 22, representantes del sector privado, del gobierno y de los trabajadores acordaron el incremento diferenciado del salario mínimo.

En torno a la negociación del CAFTA, los escollos —al menos los que traspasaron la barrera de las herméticas negociaciones— parecen comprometer los intereses centroamericanos. Al parecer, además, las negociaciones han puesto al des-

cubierto la débil integración regional y la escasa incidencia de los pares centroamericanos frente a las propuestas estadounidenses. El 12 de mayo, inició en Guatemala la cuarta ronda de negociaciones del CAFTA, con la propuesta centroamericana de ofrecer en libre comercio el 60 o 70 por ciento de sus productos contra casi el 100 por ciento de los norteamericanos. Dos días después de arrancar el evento, trascendió que Guatemala arriesgaba la integración regional al aventurarse con una apertura unilateral de sus productos cercana al 93 por ciento de sus productos, cuando, en conjunto, la región había acordado mantenerse en el intervalo entre el 50 y el 60 por ciento de desgravación.

Recuérdese que, días previos a la ronda de negociaciones, el embajador norteamericano en el país centroamericano sede, John Hamilton, advirtió la posibilidad de que los guatemaltecos quedarán al margen del CAFTA, debido a la persistencia en la violación de los derechos humanos. Al cierre de la ronda de negociaciones, Centroamérica no había alcanzado mayores logros y quedaba en evidencia la necesidad de presentar una armonización arancelaria, cuya ausencia revelaba las perennes fracturas entre los países del área. De hecho, la integración regional emergió como uno de los temas más sensibles al cierre del encuentro.

En definitiva, el curso del proceso de negociaciones del CAFTA, llevado en esta ronda de negociaciones, condujo a cuestiones delicadas. En primer lugar, quedó en evidencia que los países centroamericanos han sido incapaces de llevar una posición conjunta a Guatemala sobre temas como reglas de origen y unificación de aranceles de importación. Cada país ha dispuesto la desgravación arancelaria de distinta forma, según el producto en cuestión. Por ejemplo, mientras Guatemala, Honduras y El Salvador han fijado el arancel para el azúcar en un 40 por ciento, Nicaragua lo ha hecho en un 55 por ciento, mientras que Costa Rica ha decidido situarlo en un 49 por ciento. Por su parte, hay sectores que no tienen interés en buscar una posición conjunta en lo que respecta a la desgravación arancelaria (por ejemplo, los productores de cacao).

Otro elemento que nubló las negociaciones es la guerra comercial encubierta que mantienen los gobiernos de la región entre sí. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) ha presentado un informe en el que da cuenta de dieciséis denuncias de acciones violatorias al libre

comercio intrarregional. Prácticamente, no hay ningún gobierno que pueda presumir de no aplicar trabas al comercio con los demás países del área.

Además, es claro que Washington está interesado en realizar inversiones estratégicas en Centroamérica, como es el caso de la telefonía. Para la cuarta ronda de negociaciones, Estados Unidos ha pedido que Centroamérica libere de gravámenes el 90 por ciento de sus importaciones. Al parecer, esta posición se originó por la oferta guatemalteca de ceder la desgravación en el porcentaje citado, contrariando los acuerdos con los demás países centroamericanos. Este hecho refleja tres cosas. La primera, es la desunión que caracteriza a las acciones de los representantes del Istmo en las negociaciones con Estados Unidos. Cada país actúa por su cuenta y riesgo. Guatemala no ha sido el único país que ha buscado acelerar para su exclusivo beneficio las negociaciones del CAFTA. Cabe recordar que cuando los mandatarios de la región se reunieron con el mandatario estadounidense George W. Bush, en marzo del año pasado, el presidente de El Salvador, Francisco Flores, declaró que era preferible que los países que se encontraban listos para firmar el TLC con Washington que lo hicieran en el acto, en lugar de esperar un consenso con todos los países participantes.

La segunda cosa que queda evidenciada es que Estados Unidos se beneficia de esta desunión y que no tiene mayor interés en llegar a acuerdos justos. Por el contrario, se beneficia de las desigualdades. Quiere que se le quiten gravámenes arancelarios, mientras que por su parte no garantiza beneficios semejantes para el capital centroamericano que pretenda invertir en su país. La desgravación arancelaria que Estados Unidos ha ofrecido en esta ronda de negociaciones solo toca a algunos productos: no es el 90 por ciento que está pidiendo para sí. Por lo demás, hay una asimetría escandalosa: los productos norteamericanos llegan a la región respaldados muchas veces por subsidios —los agrícolas, por citar un ejemplo—, y proceden de un país cuyo desarrollo industrial es muchísimo más avanzado que el de Centroamérica. Las exportaciones centroamericanas no aspiran a tanto en el mercado estadounidense. Llegarán solamente al reducido mercado de los “productos étnicos”, esto es, aquellos productos regionales que los centroamericanos emigrados en Estados Unidos aprecian, en tanto suponen la reafirmación de un vínculo con sus culturas.

La tercera y última cosa que la oferta estadounidense refleja es la secretividad que rodea a todas las negociaciones del CAFTA. “Nos están ocultando información y, para colmo, el gobierno guatemalteco está ofreciendo mayor desgravación para los productos sensibles, por lo que no estamos de acuerdo con la forma en que se está negociando el Tratado de Libre Comercio”, se quejaban representantes de la industria láctea, según el matutino *El Diario de Hoy*, del 14 de mayo. Lejos de avanzar en la formación de consensos regionales, los países centroamericanos compiten deslealmente entre sí. Ello es sumamente negativo, sobre todo cuando su contraparte está buscando aumentar su poderío económico en el área.

En materia económica, pues, quedan algunos sinsabores. En primer término, es difícil deslindar las medidas impulsadas por el presidente Flores de los resultados electorales adversos a su partido. Además, cosa que no se ha evaluado suficientemente, habría que tomar en cuenta, en la línea de FUSADES, la sostenibilidad de las medidas anunciadas. En otras palabras, de fracasar tales medidas, Flores estaría pasando la factura al futuro gobierno, sea de la bandera que sea. En segundo término, en el ámbito macroeconómico, si bien las exportaciones han experimentado una recuperación notable, el alza de las importaciones es subestimado por el discurso oficial, situación que debería llevar a replantearse cuestiones medulares como la apertura económica desenfrenada. En este punto, cobra importancia —y debiera ser causa de preocupación— la celeridad de las negociaciones del CAFTA, misma que podría resultar contraproducente a los intereses nacionales. De cualquier manera, se repite la misma historia: Flores heredará al nuevo gobierno el manejo del comercio exterior en condiciones totalmente desfavorables.

En el ámbito político hay algunas novedades notorias en el mes que concluye. Hasta el 16 de marzo, era claro que ARENA podía contar casi incondicionalmente con el PCN para sacar adelante sus iniciativas legislativas. El posicionamiento firme de este último partido como tercera fuerza política en la Asamblea Legislativa, tras los resultados de las elecciones del 16 de marzo, no auguraba más que un afianzamiento del “bloque de derecha” que tan buenos resultados le había dado a ARENA en el ámbito legislativo. Solo como una posibilidad sumamente remota se barajó la hipótesis de que se estaría operando un distanciamiento

entre ambos partidos; mucho menos probable —casi imposible— era esperar que el PCN estableciera algún tipo de alianza con el FMLN. Pues bien, ambas situaciones cobraron visos de realidad, transcurridos menos de tres meses de las elecciones: el PCN y el FMLN parecen haber establecido un pacto bastante sólido, lo cual ha obligado a ARENA a buscar alianzas en primera instancia con el PDC y, más indirectamente, con el CDU. Entre tanto, estos dos últimos partidos se han acercado de un modo imprevisto, dando un valor inusitado a su reducida cuota de poder.

No se sabe qué tan duradero será el acercamiento entre el PCN y el FMLN. De sobra está decir que su alianza no pasa por los principios, sino que se trata de algo más pragmático. A ambos partidos, por razones distintas, les conviene debilitar a ARENA: al PCN, porque ello le permitiría, a futuro, erigirse como un partido alternativo de derecha; al FMLN, porque con ello vería sensiblemente aumentadas sus posibilidades de conquistar la presidencia de la República en las elecciones del 2004. Que se trate de una alianza pragmática no desdice en lo absoluto de su importancia, no solo para los intereses específicamente partidarios de ambos institutos políticos, sino en vistas a resolver problemas gruesos del país. Es desde este último punto de vista que el acercamiento PCN-FMLN debe ser enjuiciado por los ciudadanos, para no caer en condenas fáciles de una alianza que a muchos —de izquierda y de derecha— les parece una sinrazón.

Finalmente, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo —en virtud del acercamiento entre efemelenistas y pecenistas— parecen pintarse más tensas. El presidente Flores no podrá sacar adelante sus iniciativas sin la colaboración de al menos dos de los partidos mayoritarios y en la misma situación se encontrará su sucesor, independientemente del partido al cual pertenezca. Por lo tanto, las negociaciones y las alianzas, es decir, ceder para conseguir, son indispensables para los principales actores de la política nacional. De lo contrario, el país será ingobernable, pues los dos poderes del Estado se paralizarán entre sí y lo más probable es que creen una crisis institucional.

Cabe preguntarse, pues, cómo piensa el presidente Flores gobernar para la gente en este último año que le queda sin aliarse con un segundo partido y cómo calcula que podrá conseguir los dos tercios necesarios para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o para que sus vetos no sean superados por la Asamblea Legislativa. El presidente Flores se presenta desafiante y muy seguro de sí mismo ante la prensa, pero no tiene el poder de antes, al menos, no para gobernar, en una institucionalidad formalmente democrática. Cabe preguntarse también cómo harán el FMLN y el PCN para superar los vetos presidenciales, sin los votos de los dos partidos pequeños, excluidos de la Junta Directiva. O cómo piensan que podrán imponer sus candidatos para ocupar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia sin los votos de estos partidos.